

Experiencias de titulación y gestión territorial de pueblos indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe: logros, lecciones y retos

Introducción

Desde el 2007, los Consejos de las Regiones Autónomas de Nicaragua (RAAN y RAAS) y la Secretaría del Consejo de Desarrollo Costa Caribe (SCDC), con la asistencia técnica del Programa Costa Caribe del PNUD y el financiamiento de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) y, posteriormente, de la Fundación Ford¹, han trabajado conjuntamente en el fortalecimiento de la gestión territorial en la Costa Caribe de Nicaragua. Esta experiencia de cooperación ha sentado un referente en la región, primero, porque plantea un enfoque de trabajo integral donde, al mismo tiempo que se apoya la auto-demarcación y titulación territorial, se refuerzan los 5 diferentes niveles de gobierno en la región, confirmando la complementariedad establecida en la “Ley del régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco e Indio y Maíz”(ley 445). Segundo, porque logra aunar y coordinar acciones entre autoridades nacionales y regionales, agencias de cooperación, organizaciones internacionales y actores locales en la asistencia técnica e implementación de planes, programas y proyectos, cuya meta es apoyar a las autoridades territoriales y comunales para lograr el uso, tenencia, posesión efectiva y manejo sostenible del territorio y sus recursos.

Esta experiencia es ejemplo de un enfoque integral de trabajo y coordinación exitosa de esfuerzos, para contribuir a dar respuesta a las demandas de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe por mejores condiciones de desarrollo humano sostenible y gobernabilidad. El presente documento describe los logros alcanzados, lecciones aprendidas y retos a futuro en ese propósito.

1. Demarcación y titulación de los territorios indígenas

En América Latina, cuando se habla de derechos de los pueblos indígenas y afro-descendientes, el marco legal nicaragüense es visto como un modelo debido al reconocimiento que en

1987, a través de la Ley de Autonomía (ley 28), se dió a los derechos colectivos de pueblos indígenas y comunidades étnicas en la Costa Caribe. No obstante, aunque la ley 28 reconoció múltiples derechos, entre ellos a la propiedad comunal, no especificó los mecanismos para implementarlos. Fue hasta Diciembre del 2002, en respuesta al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de la comunidad Sumu-Mayangna de Awas Tingni², que se formuló y aprobó la Ley 445 arriba mencionada.

La ley 445 no sólo definió los mecanismos para realizar la demarcación y titulación de territorios comunales en la Costa Caribe, sino que reconoció a las comunidades indígenas y afro-descendientes como unidades político-administrativas y creó nuevas formas de gobierno: los gobiernos territoriales. Se sentaron así las bases para que sean los miembros de las comunidades, representados por sus autoridades territoriales, quienes definan el manejo de los recursos del territorio y el modelo de desarrollo en el mismo.

Desarrollo del proceso

En 2005, durante el gobierno del presidente Enrique Bolaños (2002-2007), en el marco del Proyecto de Ordenamiento de la Propiedad (PRODEP) financiado por el Banco Mundial, se entregaron los primeros títulos a cinco territorios indígenas dentro de la Reserva Bosawás³.

² En Septiembre del 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de la comunidad Sumu/ Mayangna de Awas Tingni en el caso interpuesto por esta en contra del Estado nicaragüense. En el fallo se solicita al Estado elaborar los mecanismos de demarcación y titulación.

³ Los territorios titulados fueron: Kipla Sait Tasbaika, Mayangna Sauni As, Li Lamni Tasbaika Kum, Mayangna Sauni Bu y Miskitu Indian Tasbaika Kum.

¹ La Fundación Ford apoya el programa de Fortalecimiento de la Gobernanza en Awaltara Luphia Nani y Doce Comunidades de la Cuenca de Laguna de Perlas. Ambos territorios ubicados en la RAAS.

Sin embargo, esos títulos fueron fuertemente criticados ya que sólo uno, correspondiente al territorio de Mayangna Sauni As, fue inscrito en el 2006 en el Registro de la Propiedad en primer asiento a favor del Estado de Nicaragua y en segundo asiento a nombre de las comunidades (Acosta: 14, 2006). En el 2007, la primera acción del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en este aspecto, fue anular los títulos emitidos en el 2005 y, en el 2008, emitir nuevos títulos estableciendo a las comunidades indígenas como únicas propietarias de los títulos territoriales. A partir de ese momento, el proceso de demarcación y titulación tomó fuerza y se estableció como prioridad dentro del plan de Desarrollo Humano de la Costa Caribe del Gobierno de Nicaragua. El plan fue propuesto por el Consejo de Desarrollo de la Costa Caribe y consensuado con las instituciones pertinentes del Gobierno Central y de los Gobiernos Regionales Autónomos de la Costa Caribe.



El proceso de autodemarcación de los territorios indígenas y afrodescendientes ha contado con el apoyo de instituciones del Estado, como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), la Secretaría del Consejo de Desarrollo Costa Caribe (SCDC), MARENA a través de la Secretaría Técnica de Bosawas (SETAB), la Procuraduría General de Justicia y el Fondo de Inversión Social (FISE). Sin embargo, su financiamiento, ha dependido, fundamentalmente,

del financiamiento de: i) ONG internacionales y nacionales como The Nature Conservancy (TNC), IBIS- Dinamarca, The Ford Foundation y Alistar; ii) Agencias de Cooperación bilateral como GTZ; la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (AID) iii) y Agencias Multilaterales como el Banco Mundial con el Proyecto de Ordenamiento de la Propiedad (PRODEP)⁴. PRODEP jugó un rol clave en el proceso de demarcación y titulación territorial al apoyar la formulación de la ley 445 (ley de propiedad comunal) y la ley 509 (ley de Catastro Nacional), así como en la demarcación de 9 de los 15 territorios titulados en las regiones autónomas de la Costa Caribe⁵.

Del 2007 a finales del 2010, se tituló un total de 15 territorios, 10 en la RAAN, 3 en la zona de régimen especial (Jinotega) y 2 en la RAAS. El total del área demarcada y titulada es de 22, 452.27km². Con excepción de dos casos (Awás Tingni y Sikilta), la CONADETI ha priorizado titular bloques de comunidades, partiendo de la base que dar títulos por comunidad individual, llevaría más tiempo y presupuesto. Hacia finales del año 2011, la CONADETI espera titular 8 territorios adicionales para un total de 23. De esos 8 nuevos territorios, 6 estarían en la RAAN: Tawira, Karatá, Diez Comunidades, Twi Waupasa, Taspa Pri y Prinsu Auhya Un y 2 en la RAAS: Territorio Kriol de Bluefields y Las Doce Comunidades Indígenas y Afrodescendientes de la Cuenca de Laguna de Perlas. Se espera además, demarcar las áreas complementarias de 2 territorios ubicados en la zona de régimen especial Wangky Wihta Bukawas (Alto Coco).

Con excepción del Territorio Kriol de Bluefields, todos los territorios aún no titulados cuentan con diagnósticos y se encuentran en la fase de resolución de conflictos⁶. En la práctica, algunos territorios han ido negociando fronteras y amojonando simultáneamente, para agilizar el proceso de demarcación. Finalmente, en ninguno de los territorios titulados se ha llevado a cabo la última etapa del proceso; el saneamiento, donde se deben definir medidas y acuerdos sobre la situación de los llamados “terceros”- no miembros de las comunidades originarias y presentes en el territorio—la mayoría de ellos recién llegados migrantes mestizos de primera generación.

⁴Acosta, María Luisa, 2010, *En Wani*, Enero- Marzo. # 60 pp: 5-17

⁵En 1997 y 1998, el Banco Mundial y la Agencia Internacional de Fomento (AIF), financiaron el “Diagnóstico general sobre la tenencia de la tierra en las comunidades indígenas de la Costa Atlántica”. El diagnóstico fue hecho por el Caribbean and Central America Research Council (CCARC). Este fue el primer esfuerzo por entender la forma en que las comunidades indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe conciben su territorio como grupo o bloque de comunidades. El diagnóstico señaló las tensiones entre bloques de comunidades y pasos para iniciar el proceso de auto-diagnóstico y demarcación a partir de la memoria colectiva e historia oral de las comunidades. Los resultados del diagnóstico sirvieron de insumo importante para formular la Ley # 445

⁶El proceso de demarcación y titulación cuenta con 5 etapas: solicitud y auto-diagnóstico, resolución de conflictos, medición y amojonamiento, titulación y saneamiento. Las instituciones encargadas del proceso de demarcación y titulación son las Comisiones Intersectoriales de Demarcación y Titulación (CIDT) y la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (CONADETI).

2. Acciones emprendidas

En el marco de colaboración entre Consejos Regionales, Secretaría del Consejo de Desarrollo de la Costa Caribe, PNUD y la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD), se han implementado tres programas. El programa Pana Laka I (2007-2009), Pana Laka II (conocido como Pana Laka-Wan Tasbaya en la RAAN y Pana Laka-NUMADA en la RAAS) (2010-2012) y el programa de apoyo a la auto-demarcación (2010-2011), todos con el financiamiento de la ACCD. Así mismo, el programa de fortalecimiento de la gobernanza en el territorio Awaltara Luhpia Nani y las Doce comunidades Indígenas y Afrodescendientes de la Cuenca de Laguna de Perlas, ha contado con el apoyo de la Fundación Ford (2010-2011) para realizar procesos de demarcación y titulación similares.

En la primera fase del programa Pana Laka, el enfoque de trabajo se centró en fortalecer las estructuras de gobernanza regional y territorial. Sin embargo, en la segunda fase de ese programa, se identificó la necesidad de brindar asistencia a los bloques territoriales que no lograron ser titulados con el PRODEP. Actualmente, en el proyecto de auto-demarcación se apoyan 6 bloques territoriales. El apoyo a estos territorios facilitará la demarcación de dos bloques colindantes no incluidos en el programa, convirtiéndose en beneficiarios indirectos—ellos son Diez Comunidades y Prinsu Auhya Un. En este área se ha apoyado financieramente formular los auto-diagnósticos y facilitar los procesos de resolución de conflictos y amojonamiento.

En el área de fortalecimiento institucional, los programas emprendidos parten de reconocer que los gobiernos territoriales

tienen el potencial de crear espacios de participación y autogestión acordes a la cosmovisión, conocimientos y necesidades de las comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe. Sin embargo, se reconoce también, que ese proceso ha implicado un reto singular para estos pueblos debido a lo inédito del proceso, la rapidez con que se realiza y la necesidad de desarrollar capacidades y experiencias gerenciales y administrativas en sus dirigentes y miembros.

Con base a ello se diseñaron acciones para fortalecer organizativa y técnicamente a los gobiernos territoriales de manera que tengan las herramientas y los conocimientos técnicos necesarios para definir la forma de llevar adelante el ordenamiento y gestión territoriales. Por otro lado, se enfocaron esfuerzos para robustecer la relación entre los diferentes niveles de gobierno en la Costa Caribe y afianzar las redes de gobernanza, abonando a una mejor y mayor coordinación de la gobernabilidad regional. Algunas de las acciones realizadas fueron: (i) Dar asistencia técnica para diseñar los mecanismos institucionales de gobiernos territoriales y algunos gobiernos comunales; (ii) Fortalecer los procesos internos de gobernanza y (iii) Desarrollar capacidades en temas relativos al manejo y gestión del territorio.

Cuadro 1:

Territorios apoyados por programas coordinados por los Consejos Regionales RAAN y RAAS con el apoyo técnico del PNUD y financiamiento técnico de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) y la Fundación Ford.

Territorios apoyados en auto-demarcación y fortalecimiento institucional	Territorios apoyados en fortalecimiento institucional
RAAN	RAAN
Tawira	Twahka
Karatá	Wangki Li Aubra
Taspa Pri	Li Lamni Tasbaika Kum
Twi Waupasa	Wangki Twi-Tasba Raya
	Prinsu Auhya Un
	Diez Comunidades
RAAS	RAAS
Territorio Kriol de Bluefields	Awaltara Luhpia Nani
Doce comunidades indígenas y afrodescendientes de la Cuenca de Laguna de Perlas.	

Fuente: Área Costa Caribe – PNUD Nicaragua.

El apoyo institucional a los gobiernos territoriales, incluyó a los 6 territorios que participan en el programa de auto-demarcación, y 6 territorios ya titulados por la CONADETI. Si a dichos territorios se suma aquellas comunidades asistidas por el programa Pana Laka después del huracán Félix, del 2007 al 2011, los programas han apoyado a 13 de un total de 23 territorios. Esa cifra representa un poco más de la mitad de los territorios indígenas y afro-descendientes en la Costa Caribe de Nicaragua. Se ha invertido, hasta la fecha, la cantidad de US\$ 1,421,812.89 de dólares⁷ en ese esfuerzo.

3. Logros

Para los miembros de las comunidades, las autoridades de los Consejos Regionales, organizaciones comunitarias y la sociedad costeña organizada, uno de los principales logros de los programas emprendidos ha sido contribuir a consolidar el proceso de titulación territorial iniciado por el PRODEP. Se ha logrado alcanzar así, el reconocimiento jurídico de la propiedad comunal y territorial de los pueblos originarios. Esa es una demandada histórica fundamental de los pueblos indígenas y afrodescendientes en América Latina. Ese logro está respaldado, también, por el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (11 de los 46 artículos de la Declaración se refieren explícitamente al ejercicio de derechos relativos al territorio y sus recursos)⁸. Un líder territorial afirmó: “el logro para nosotros, es ser dueños de la tierra con documentos, porque antes sabíamos que éramos dueños, pero sin documentos para probarlo” (líder del territorio 12 comunidades indígenas y afrodescendientes de la Cuenca de Laguna de Perlas, a ser titulado con apoyo del programa Auto-demarcación financiado por ACCD).

El segundo logro importante fue fortalecer institucionalmente a los territorios, para que sean sus miembros quienes definan el modelo y objetivo del desarrollo humano que buscan alcanzar. En este proceso destacan tres resultados:

- a. Fortalecimiento de la legitimidad de las autoridades territoriales emergentes. Se ha aportado al reconocimiento institucional de estas autoridades, enlazándolas a otros niveles de gobernanza regional;

⁷ Basado en fondos ejecutados hasta abril 2011.

⁸ Art: 28 (b); 10; 25; 26 (1,2,3); 27, 28 (1,2); 29; 30 (1,2); 31 (1,2); 32 (1,2,3); 34. Declaración de las NN.UU. sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (13 de Septiembre, 2007).



- b. Fortalecimiento de los mecanismos institucionales internos, necesarios para llevar adelante la gestión del territorio desde el espacio comunal/territorial;
- c. Formación de autoridades territoriales y comunales, que cuentan con mayores conocimientos para definir y negociar las políticas de desarrollo para sus territorios.

4. Buenas prácticas y lecciones

Buenas prácticas:

- a. Una planificación que reconoce la especificidad regional. Si bien la RAAS y RAAN constituyen gran parte del territorio nacional -la Costa Caribe-, existen diferencias entre regiones. El programa Pana Laka, en su segunda fase, logró poner en práctica una planificación diferenciada que responde a la especificidad de cada región.
- b. La implementación de programas formulados por los Gobiernos Regionales y Consejos Regionales de la RAAN y RAAS, con la asistencia técnica del PNUD, fortalece la comunicación entre las autoridades regionales y los líderes territoriales y comunales, consolidando la institucionalidad regional.
- c. Existencia de un equipo profesional, originario y ubicado en las Regiones Autónomas, conocedor de las dinámicas locales y saberes sobre la historia y cultura regionales, identificado con los derechos de los pueblos indígenas y afro-descendientes y sensible a sus grandes retos.

Lecciones:

- a. Importancia de apoyar en la construcción del territorio como bien común. Si bien el concepto territorio es

compartido por los pueblos indígenas y afrodescendientes en la región, para algunas comunidades las formas de gobernanza territorial son nuevas. Por otro lado, no siempre existe consenso sobre cómo desarrollar la gestión territorial. Debido a la credibilidad de los programas emprendidos, estos juegan un rol clave en la facilitación de acuerdos entre actores locales con visiones distintas. Es necesario continuar apoyando en la facilitación de acuerdos, así como a consolidar el capital social y humano de la tradición comunitaria, basado en compartir espacios, flora y fauna, de forma sostenible e intercultural.

- b. Contar con presupuesto propio fortalece institucionalmente a los gobiernos territoriales. Sin recursos financieros para trabajar es difícil poner en práctica lo aprendido. Esto porque, si bien es necesario fortalecer las habilidades y conocimientos en la administración de la gestión territorial, es complejo lograrlo si los gobiernos territoriales no cuentan con un presupuesto para organizar sus propuestas de desarrollo y luego implementarlas. Por otro lado, fondos propios confieren mayor independencia en la toma de decisiones locales. Reconociendo esto, el Gobierno Central, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), realizó las primeras transferencias directas a algunos Gobiernos Territoriales⁹, evidenciando su compromiso con el fortalecimiento de la gestión territorial.
- c. Fortalecer los mecanismos de participación, transparencia y toma de decisiones locales. Las comunidades indígenas y afro-descendientes cuentan con mecanismos para tomar decisiones comunales que deben ser respetadas y fortalecidas, de manera que tanto sus autoridades como las normas, reglamentos y los planes de desarrollo sean definidos por los miembros de las comunidades. De igual manera, se deben consolidar los mecanismos de rendición de cuentas de las autoridades territoriales y comunitarias con los miembros de las comunidades. De lo contrario, las autoridades, y las normas establecidas por estas, no responderán a las demandas de las comunidades, perdiendo legitimidad y eficacia.
- d. Importancia de apoyar y facilitar la formulación y realización de políticas públicas, programas y proyectos nacionales, encaminados a dar pleno cumplimiento al Convenio 169 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de Pueblos Indígenas. Tal es el caso de las políticas de demarcación y titulación impulsadas desde instancias del Gobierno Central (CDC y MHCP) y regionales como la CONADETI. En el área

de demarcación y titulación, los programas señalados han contribuido a consolidar los procesos en marcha. Sin embargo, es en el área de fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades donde los aportes han tenido mayor impacto y evidencia.

5. Retos

- a. ¿Cómo apoyar un efectivo proceso de lo que hasta ahora se ha denominado saneamiento? El primer reto es: ¿Cómo abordar de forma dialógica un efectivo reconocimiento, restitución y ejercicio de derechos de uso y posesión del territorio y sus recursos? El proceso es complejo en vista de la cantidad de personas naturales (terceros) presentes en los territorios y, en la mayoría de los casos, su falta de reconocimiento de las autoridades indígenas y afro-descendientes y los derechos de estas comunidades. A eso se agrega el potencial de violencia que subyace las relaciones inter-étnicas en la región cuando se trata de territorios y recursos. A nivel técnico, el reto principal está en apoyar los esfuerzos regionales y territoriales para evaluar la factibilidad, social, cultural, económica y política de las estrategias de saneamiento que ya se han diseñado así como del marco legal que las ampara. Por otro lado, se deben unificar esfuerzos para desarrollar estrategias que faciliten alcanzar consensos y administrar conflictos y tensiones entre comunidades y grupos étnicos.



- b. Se debe fortalecer a los gobiernos territoriales, revitalizando las tendencias armonizadoras y creativas de las prácticas y visiones de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Un tema clave de los programas emprendidos ha sido brindar apoyo institucional. Sin embargo, es siempre un reto diseñar propuestas que fortalezcan las formas de gobierno de estos pueblos. El desafío está en trascender dicotomías que antagonizan tradición

⁹ Territorio Awaltara Luhpia Nani en la RAAS y los 3 territorios dentro de la Zona de Régimen Especial.

y desarrollo, comunidad y sociedad, adscripción étnica y construcción de ciudadanías, a fin de apoyar procesos locales con diferentes miradas hacia el desarrollo humano.

c. Es necesario apoyar la formulación de políticas públicas nacionales y regionales que fortalezcan y respalden la autogestión territorial. Uno de los mayores temores de algunos comunitarios es que, a pesar de contar con títulos legalizados, tengan pocas posibilidades de ejercer posesión y uso de sus derechos a fin de gestionar real y efectivamente el territorio y sus recursos. Estos comunitarios han señalado la necesidad de políticas estatales que apoyen: emprender programas de co-manejo de áreas protegidas, la transparencia en la transferencia de ingresos, implementar la etapa de saneamiento y apoyar financieramente a los territorios y sus comunidades para emprender programas de desarrollo sostenible, entre otros. En ese contexto, se debe fortalecer las destrezas y conocimientos locales para negociar ámbitos de trabajo para cada autoridad y manejar las tensiones propias de las relaciones entre comunidad, territorio, municipio, región y Estado.

d. Apoyar a definir estrategias de desarrollo sostenibles desde las comunidades: En territorios ubicados dentro de áreas protegidas definidas por el Estado, el marco legal ambiental limita el desarrollo de actividades económicas que generen ingresos¹⁰. En territorios fuera de áreas protegidas, se ha observado que existen pocas opciones económicas que lleven a un manejo sostenible del bosque y la tierra. El desafío está en apoyar la formulación de modelos gerenciales y administrativos para gestionar el territorio y propuestas de desarrollo sostenible. De lo contrario, sin otras fuentes de ingreso y propuestas de manejo exitosas y sostenibles, el modelo tradicional extractivo y de explotación extensiva (forestal y agropecuario) ineficiente, destructiva y contaminante será por omisión, el gran ganador. En consecuencia, las luchas de poder e inter-étnicas para controlar la tierra y sus recursos, a fin de expandir la ganadería extensiva o extraer los recursos mineros, forestales y pesqueros remanentes se agravarán, y acrecentarán en detrimento de las comunidades originarias.

¹⁰ Las leyes ambientales limitan en todas las áreas protegidas el desarrollo de actividades económicas. Sin embargo, dentro de esas áreas existe una clasificación, en base a la cuál puede existir mayor o menor permisividad legal. En muchos casos, el débil control sobre zonas clasificadas como de amortiguamiento explica porque en ellas muchos pobladores hacen caso omiso a dichas leyes. Ver Bonilla, Alejandro. 2010. "Factibilidad de la etapa de saneamiento de los territorios indígenas de Bosawás y de la RAAN. Gobierno Territorial Indígena de Matungbak".

6. Conclusión

El derecho al territorio colectivo ha sido definido por la CIDH como un derecho humano de los pueblos indígenas del continente. De igual manera, el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Gobierno de Nicaragua en el 2010, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, subrayan el reconocimiento y protección del derecho a la propiedad comunal, como derecho fundamental de los pueblos indígenas. Los programas impulsados por los Consejos Regionales de las Regiones Autónomas, conjuntamente con la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (CONADETI), la Secretaria del Consejo de Desarrollo Costa Caribe (SCDC), PNUD, ACCD y Fundación Ford, han contribuido a fortalecer el proceso de titulación territorial de las comunidades indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe.

Este proceso fue iniciado por el Programa de Ordenamiento de la Propiedad (PRODEP), financiado por el Banco Mundial. Se ha respondido así a la legislación internacional, pero ante todo, a una de las demandas centrales de los pueblos originarios. Todos estos avances no se hubiesen logrado sin la voluntad política del Gobierno de Nicaragua, que colocó como una de sus prioridades el apoyo a la demarcación de los territorios indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe; el apoyo y coordinación de agencias de cooperación, ONG internacionales y agencias multilaterales, y a los enormes esfuerzos de las autoridades comunales, territoriales y regionales autónomas por alcanzar, el cumplimiento de un derecho histórico fundamental.



Mojón instalado por medio del proyecto de demarcación y titulación de territorios indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua, con asistencia técnica del PNUD y el financiamiento de la Cooperación Catalana y la Fundación Ford.

Cuadro 2.

Territorios titulados a finales del 2010 (15 en total)

Territorios por región y zona	Comunidades	Año en que se da título	Población	Cantidad de hectáreas	Cantidad de Km ²
RAAN					
1.Kipla Sait Tasbaika Kum	14	2008	5,164	113,597	1,135.97
2.Li Lamni Tasbaika Kum	26	2008	9,103	138,227	1,382.27
3.Wangki Li Aubra	18	2009	7,991	88,434.78	884.36
4.Awas Tingni	3	2008	1,164	73,394	733.94
5.Mayangna Sauni As	16	2008	10,000	163,810	1,630.10
6. Sikilta	1	2009	870	43,241.40	432.41
7. Twahka	14	2009	2,400	54,556	545.56
8.Wangki Maya	21	2009	16,596	138,882	1,388.81
9. Wanki Twi-Tasba Raya	21	2009	18,117	162,181	1,621.82
10.Prinzu Awala	19	2009	6,482	414,955	4,149.55
RAAS					
11. Awaltara Luhpia Nani Tasbaika	16	2008	9,679	241,307	2,413.07
12. Rama y Kriol	9	2009	1,936	406,849	4,068.49
Zona del Régimen Especial del Alto Coco (Wangky Wihta Bukawas)					
13. Miskitu Indian Tasbainka Kum	20	2008	7,500	65,230	652.30
14. Mayangna Sauni Bu	9	2008	2,500	94,838	948.38
15. Matungback	9	2009	4,743	62,883	628.83
Total	216		103,854	2,245,226.84	22,452.27

Cuadro 3.

Territorios por titular

Territorios que faltan por titular	Comunidades	Estado de Avance
Puerto Cabezas		
1 Diez Comunidades	23	En etapa inicial de resolución de conflictos.
2 Karatá	3	Realizando auto-diagnóstico.
3 Tawira	17	En etapa inicial de auto-diagnóstico
4 Twi Waupasa	17	En etapa inicial de resolución de conflictos y amojonamiento.
5 Tasba Pri	13	En etapa inicial de resolución de conflictos y amojonamiento
Prinzapolka		
6 Prinzu Auhya Un	12	En etapa inicial de resolución de conflictos. Pendiente de realizar el diagnóstico del bloque Wawa Bar, que en marzo del 2011 solicitó ser titulado separadamente.
Laguna de Perlas y Kukra Hill		
7 Doce Comunidades Indígenas y Afrodescendientes de la Cuenca de Laguna de Perlas	12	En etapa de deslinde y amojonamiento. Existe, sin embargo, diferencias entre el bloque Tasba Pauni y Marshall Point con otras comunidades miembros del bloque.
Bluefields		
8 Territorio Kriol de Bluefields	4	En espera de iniciar diagnóstico
Total	41	

Fuente: Acosta, 2010.

7. Bibliografía básica:

Acosta, María Luisa. 2006. "Awes Tigni versus Nicaragua, y el proceso de demarcación de tierras indígenas en la Costa Caribe Nicaragüense". En *Wani*, No 47, pp: 6- 15.

Antonio, Margarita. 2008. ¿De quiénes y para quiénes son las tierras Costeña?" En *Envío*, No 321. <http://www.envio.org.ni/articulo/3904>

Asamblea Nacional de Nicaragua. 1987. Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua. Ley No 28. En *La Gaceta* No 238 de Octubre de 1987.

Asamblea Nacional. 2003. Ley 445, Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz. En *La Gaceta* No 16 del 23 de Enero de 2003.

Bonilla, Alejandro. 2010. "Factibilidad de la etapa de saneamiento de los territorios indígenas de Bosawás y de la RAAN. Gobierno Territorial Indígena de Matungbak".

CACRC. 1998 Diagnostico general sobre la tenencia de la tierra en las comunidades indígenas de la Costa Atlántica. Bluefields y Puerto Cabezas, Nicaragua: Central American and Caribbean Research Council

Corte Interamericana de Derechos Humanos. 2002. Informe no. 75/02, Caso 11.140 (27 de diciembre de 2002), de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la comunidad Mayangna (sumo) de Awes Tigni contra Nicaragua, R (31 de agosto de 2001) CIDH (Ser C) No 79.

Finley-Brook y Offen, Karl. 2009. Bouding the Commons: Land Demarcation in Northeastern Nicaragua. En *Bulletin of Latin American Research*. Vol 28, No3, pp: 343-363.

Goett, Jennifer A. 2006. Diasporic Identities, Autochthonous Rights: Race, Gender and the Cultural Politics of Creole Land Rights in Nicaragua. Austin, Texas: University of Texas Library Diss.

Grünberg, Georg. 2004. "Tierras y territorios indígenas en Centro América". En *Asuntos Indígenas: Derechos Territoriales*. IWGIA. No 4, pp: 6-21.

Gurdián, Galio; Gordon, Edmund y Hale, Charles. 2003. Rights, Resources, and the Social Memory of Struggle:

Reflections on a Study of Indigenous and Black community land Rights on Nicaragua's Atlantic Coast. En *Human Organization*, Vol 62. No 4, pp: 369- 381.

Larson, Anne. 2010. "Making the 'rules of the game': Constituting Territory and Authority in Nicaraguans' Indigenous Communities". En *Land Use Policy*. No 27, pp: 1143-1152.

Naciones Unidas. Asamblea General "Resolución 61/295: Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas", Doc. ONU A/61/67, Anexo (13 de septiembre de 2007).

OIT. 1989. Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, No 169.

PNUD. 2005. Las Regiones Autónomas de la Costa Caribe: ¿Nicaragua asume su diversidad? Informe de Desarrollo Humano. Managua, Nicaragua: PNUD.

Soto, Fernanda; URACCAN-IREMADES y NITLAPAN. 2010. "Demarcación y titulación en Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense: Breve reseña histórica y la puesta en marcha de la gobernanza territorial en la RAAN". Material didáctico para *Diplomado "Tenencia, Derechos y Gobernanza en Territorios Indígenas"*. RRI y Fundación Ford.

Acosta, Maria Luisa. 2010. "Los retos del proceso de titulación y saneamiento como protección a la propiedad indígena", En *Wani*, Enero-Marzo. No 60, pp: 5-17.

Indigenous and afro-descendant peoples experiences of territorial management and land titling on the Caribbean Coast of Nicaragua: achievements, lessons and challenges

Introduction

Since 2007, the Regional Councils of the Autonomous Regions (RAAN and RAAS) and the Secretariat for the Caribbean Coast Development Council (SCDC) have worked with the technical support of the UNDP Caribbean Coast Program and with financing from the Catalan Agency for Development Cooperation (ACCD) and, subsequently, the Ford Foundation¹ to strengthen land management on the Caribbean Coast of Nicaragua. This cooperation experience has set a benchmark in the region. First, because it represents an integrated work approach which, at the same time as supporting the self-demarcation and titling of land, reinforces the five different governmental levels in the region, confirming the complementarity established in the “Law of communal property of the indigenous peoples and ethnic communities in the Autonomous Regions of the Atlantic Coast of Nicaragua and of the Bocay, Coco, Indian and Corn rivers” (Law 445). Second, because it manages to unite and coordinate the actions of national and regional authorities, cooperation agencies, international organizations and local actors in technical assistance and implementing the plans, programs and projects, whose goal is to support local territorial and community authorities achieve the use, tenure, effective possession and sustainable management of the land and its resources.

This experience is an example of an integrated work approach and successful coordination of efforts in helping respond to the demands of the indigenous and afro-descendant peoples of the Caribbean Coast through improved conditions for sustainable human development and governance. To that end, this document describes the achievements attained, lessons learned and future challenges.

1. Demarcation and titling of indigenous and afro-descendant lands

When talking of the rights of indigenous and afro-descendant peoples in Latin America, the Nicaraguan legal framework is viewed as a model because of its recognition, in 1987, of the collective rights of the Caribbean Coast's indigenous peoples and ethnic communities through the Autonomy Law (Law 28). However, while Law 28 recognized many rights, including that of communal ownership, it did not specify the mechanisms to implement them. It was not until December 2002, in response to the ruling of the Inter-American Court of Human Rights (IACHR) in favor of the Sumu-Mayangna community of Awas Tingni², that the above-mentioned Law 445 was formulated and approved.

¹ The Ford Foundation supports the Program for the Strengthening of Governance in Awaltara Luphia Nani and the Twelve communities of the Pearl Lagoon Basin. Both territories situated in the RAAS.

² In September, 2001, the Inter-American Court of Human Rights ruled in favor of the Sumu/Mayangna community of Awas Tingni in the case it brought against the Nicaraguan State. In the ruling the State is required to develop demarcation and titling mechanisms.

Law 445 not only defined the mechanisms for the demarcation and titling of communal lands on the Caribbean Coast, but also recognized the indigenous and afro-descendant communities as political and administrative units and created new forms of government: territorial governments. In doing so, it laid the groundwork for the territory's development model and the management of its resources to be defined by community members, represented by their territorial authorities.

Development of the process

During President Enrique Bolaños' government (2002-2007), in 2005, the first titles were handed over to five indigenous territories in the Bosawas Biosphere Reserve³ as part of the Land Administration Project (PRODEP), financed by the World Bank. However, these titles were heavily criticized because only one, the Mayangna Sauni As territory, was inscribed in the Land Register, in 2006: the first entry in favor of the State of Nicaragua and the second entry in the name of the communities (Acosta: 14, 2006). In 2007, the National Unity and Reconciliation Government's first act, in this regard, was to annul the titles issued in 2005 and, in 2008, to issue new titles establishing the indigenous communities as the sole owners of the land titles. Since that time, the demarcation and titling process gained momentum and became established as a priority within the Nicaraguan Government's Human Development Plan for the Caribbean Coast. The Plan was proposed by the Caribbean Coast Development Council and agreed upon with the relevant institutions of Central Government and the Autonomous Regional Governments of the Caribbean Coast.

The self-demarcation process for indigenous and afro-descendant territories has been supported by State institutions, such as the Ministry for Finance and Public Credit (MHCP); the Secretariat of the Caribbean Coast Development Council (SCDC); MARENA, via the Bosawas Technical Secretariat (SETAB); the Office of the State Attorney General; and the Social Investment Fund (FISE). However, its financing has fundamentally depended on financing from: i) International NGOs such as The Nature Conservancy (TNC), IBIS-Denmark, The Ford Foundation and Alistar; ii) Bilateral Cooperation Agencies such as GTZ and the United States Agency for Development

³ The titled territories were: Kipla Sait Tasbaika, Mayangna Sauni As, Li Lamni Tasbaika Kum, Mayangna Sauni Bu and Miskitu Indian Tasbaika Kum.

(USAID); and iii) Multilateral Agencies such as the World Bank, through the Land Administration Project (PRODEP)⁴. PRODEP played a key role in the land demarcation and titling process by supporting the formulation of Law 445 (Law on Communal Property) and Law 509 (National Land Registry Law), as well as in the demarcation of 9 of the 15 titled territories in the Autonomous Regions of the Caribbean Coast⁵.

From 2007 to late 2010, a total of 15 territories were titled: 10 in the RAAN, 3 in the Special Zone (Jinotega) and 2 in the RAAS. A total area of 22,452.27 km² has been demarcated and titled. With two exceptions (Awás Tingni and Sikilta) CONADETI has prioritized titling blocs of communities, on the basis that giving titles to individual communities would take more time and budget. By the end of 2011, CONADETI expects to title 8 more territories to make a total of 23. Of these 8 new territories, 6 will be in the RAAN: Tawira, Karata, Ten Communities, Twi Waupasa, Taspá Pri and Prinsu Auhya Un; and 2 in the RAAS: Bluefields Kriol Territory and the Twelve Indigenous and Afro-descendant Communities of the Pearl Lagoon Basin. They also expect to demarcate complementary areas to two territories located in the Upper Coco Special Zone (Wangky Wihta Bukawas).

With the exception of the Bluefields Kriol Territory, all territories, even those not yet titled, have made diagnostic studies and are at the stage of conflict resolution⁶. In practice, to expedite the demarcation process, some territories have been negotiating borders and simultaneously marking the boundaries. Finally, none of the titled territories has reached the last stage of the process, the saneamiento or vetting stage, where measures and agreements must be defined about the status of the so-called “third parties” –persons living in the territory who are not the communities’ original peoples— most of them newly-arrived, first-generation mestizo migrants.

⁴ Acosta, María Luisa, 2010, *In Wani*, January- March. # 60 pp: 5-17.

⁵ In 1997 and 1998, the World Bank and the International Development Agency (IDA), financed the “General diagnostic study on land tenure in the indigenous communities of the Atlantic Coast”. The study was made by the Caribbean and Central America Research Council (CCARC). This was the first effort to understand how indigenous and afro-descendant communities on the Caribbean Coast perceive their territory as a group or bloc of communities. The diagnostic study noted tensions between blocs of communities and steps to start their own diagnostic studies and demarcation process from the collective memory and oral history of the communities. The results of the diagnostic study were an important input in formulating Law # 445.

⁶ The demarcation and titling process has 5 stages: Application and their own diagnostic study, conflict resolution, measuring and marking the boundaries, titling and the vetting process. The institutions responsible for the demarcation and titling process are the Demarcation and Titling Inter-Sectorial Commissions (CIDT) and the National Commission for Demarcation and Titling (CONADETI).

2. Action taken

Three programs have been implemented within the framework of collaboration between the Regional Councils, the Secretariat for the Caribbean Coast Development Council, UNDP and the Catalan Agency for Development Cooperation (ACCD): The Pana Laka I Program (2007-2009), Pana Laka II (known as Pana Laka-Wan Tasbaya in the RAAN and Pana Laka-NUMADA in the RAAS) (2010-2012) and the self-demarcation support program (2010-2011), all with financing from ACCD. Similarly, the governance strengthening program in the Awaltara Luhpia Nani territory and in the Twelve Indigenous and Afro-descendant Communities of the Pearl Lagoon Basin has received support from the Ford Foundation (2010-2011) in order to carry out similar demarcation and titling processes.

In the first phase of the Pana Laka program, work was focused on strengthening regional and territorial governance structures. However, in the second phase of this program we identified the need to offer assistance to territorial blocs that had not been titled with PRODEP. Currently, six territorial blocs are being supported in the self-demarcation project. Support for these territories will facilitate the demarcation of two adjacent blocs not included in the program (Ten Communities and Prinsu Auhya Un), making them into indirect beneficiaries. In this area, financial support covers the formulation of their own diagnostic study and facilitation of conflict resolution processes and boundary marking.

In the area of institutional strengthening, programs undertaken are based on the recognition that territorial governments have the potential to create opportunities for participation and self-management in accordance with the worldview, knowledge and needs of the indigenous and afro-descendant communities of the Caribbean Coast. However, it is also recognized that this process has involved a unique challenge for these peoples because of its novelty, the speed with which it was carried out and the need for their leaders and members to develop skills and experience in management and administration.

Based on this, measures have been designed to organizationally and technically strengthen the territorial governments so that they have the necessary technical tools and knowledge to define how to proceed with measuring, titling and the management of their lands. At the same time, efforts have been focused on reinforcing the relationship between the different levels of government on the Caribbean Coast and establishing governance networks, preparing the ground for better and greater coordination of regional governance. Some of the actions taken were: (i) providing technical assistance in designing institutional mechanisms for territorial governments and some communal governments; (ii) strengthening internal governance processes, and (iii) developing skills in aspects related to the territory’s management and administration.

Institutional support for the territorial governments included the 6 territories participating in the self-demarcation program and the 6 territories already titled by CONADETI. With the addition of those

communities attended by the Pana Laka program after Hurricane Felix (from 2007 to 2011), the programs have supported a total of 13 out of 23 territories. This figure represents slightly more than half the indigenous and afro-descendant territories on the Caribbean Coast of Nicaragua. To date, US\$ 1,421,812.89 dollars⁷ have been invested in this undertaking.

3. Achievements

For the community members, the Regional Council authorities, communitarian organizations and organized Coast society, one of the main achievements of the programs undertaken has been to help consolidate the territorial titling process initiated by PRODEP. This has achieved legal recognition for the original peoples' ownership of communal and territorial lands, which is a fundamental historical demand of Latin America's indigenous and afro-descendant peoples. This achievement is also supported by ILO Convention 169 and the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (11 of the 46 articles in the Declaration explicitly refer to the exercise of rights related to land and its resources)⁸. On being given the land title to the territory with 12 indigenous and afro-descendant communities in the Pearl Lagoon Basin, with support for the self-demarcation program financed by ACCD, a territorial leader said: "For us, the achievement is to have the land papers to the land we own, because we knew before that we owned the land but didn't have the documents to prove it."

The second major achievement was to strengthen the territories institutionally, so that its members are those who define the human development model and the goals they seek to achieve.

⁷ Data based on funding implemented until April 2011.

⁸ Art: 28 (b); 10; 25; 26 (1, 2, 3); 27, 28 (1, 2); 29; 30 (1, 2); 31 (1, 2); 32 (1, 2, 3); 34. UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (September 13, 2007).

In this process, there are three notable results:

- a. Strengthening the legitimacy of the emerging territorial authorities. This has contributed to the institutional recognition of these authorities, linking them to other levels of regional governance;
- b. Strengthening internal institutional mechanisms. This is necessary in order to advance land management from communal/territorial areas;
- c. Formation of territorial and communal authorities. They have greater knowledge for defining and negotiating their territories' development policies.

4. Good practices and lessons

Good Practices:

- a. Planning that recognizes the regions' specific characteristics. Although the RAAS and RAAN constitute a large part of the country –the Caribbean Coast–, there are differences between the regions. The Pana Laka program, in its second phase, managed to implement a differentiated planning that responded to the specific nature of each region.
- b. The implementation of programs formulated by the RAAN and RAAS Regional Governments and Regional Councils, with technical assistance from UNDP, strengthens communication between the regional authorities and the territorial and communal leaders, consolidating the regional institutional framework.

Table 1:

Territories supported by programs coordinated by the RAAN and RAAS Regional Councils with technical support from UNDP and financial and technical support from the Catalan Agency for Development Cooperation (ACCD) and the Ford Foundation.

Territories supported in self-demarcation and institutional strengthening	Territories supported in institutional strengthening
RAAN	RAAN
Tawira	Twahka
Karata	Wangki Li Aubra
Taspa Pri	Li Lamni Tasbaika Kum
Twi Waupasa	Wangki Twi-Tasba Raya
	Prinsu Auhya Un
	Ten Communities
RAAS	RAAS
Bluefields Kriol Territory	Awaltara Luhpia Nani
Twelve indigenous and afro-descendent communities in the Pearl Lagoon Basin.	

Source: Caribbean Coast Program – UNDP Nicaragua.

- c. The existence of a professional team of original peoples located in the Autonomous Regions, familiar with local dynamics and knowledgeable about regional history and culture, identified with the rights of indigenous and afro-descendant peoples and sensitive to the challenges.

Lessons

- a. The importance of supporting the structuring of the territory as a common good. While the territorial concept is shared by indigenous and afro-descendant peoples in the region, territorial governance processes are new for some communities. In addition, there is not always consensus about how to develop land management. The credibility of the programs undertaken has enabled them to play a crucial role in facilitating agreements between local actors with different visions. It is necessary to continue supporting the facilitation of agreements, as well as to consolidate social and human capital in the communitarian tradition, based on shared areas, flora and fauna, in a sustainable and intercultural manner.
- b. The territorial governments are institutionally strengthened by having their own budgets. Without financial resources to work with, it is difficult to put into practice what has been learned. This is because, while it is necessary to strengthen skills and knowledge in the administration of territorial management, it is complicated to achieve this if the territorial governments do not have a budget to organize, and then implement, their development proposals. On the other hand, when making local decisions, having their own funds confers greater independence. Recognizing this, Central Government, through the Ministry of Finance and Public Credit (MHCP), made the first direct



transfers to certain territorial governments⁹, demonstrating its commitment to strengthening territorial management.

- c. Strengthening the mechanisms for local participation, transparency and decision-making. Indigenous and afro-descendant communities have mechanisms for communal decision-making that must be respected and strengthened, so that it is community members who define their authorities and also the rules, regulations and development plans. Similarly, the territorial and community authorities' mechanisms for accountability must be consolidated with members of the community. Otherwise, the authorities, and the rules established by them, will not respond to the communities' demands, thereby losing legitimacy and effectiveness.
- d. The importance of supporting and facilitating the formulation and implementation of the country's public policies, programs and projects, in order to fully comply with Convention 169 and the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Such is the case with the demarcation and titling policies promoted by Central Government agencies (SCDC and MHCP) and regional institutions like CONADETI. The demarcation and titling programs mentioned above have helped consolidate the on-going processes. However, their contributions are more conspicuous and have had the greatest impact in the area of institutional strengthening and skill development.

5. Challenges

How to support an effective vetting process of what has hitherto been called saneamiento which literally means cleansing or drainage? The first challenge is: How to begin a dialogue about an effective recognition, restitution and exercise of the rights to territorial ownership and the use of its resources? The process is complex given the number of (third party) individuals present in the territories and, in most cases, their lack of recognition of the indigenous and afro-descendant authorities and the rights of their communities. Added to this is the potential for violence underlying inter-ethnic relationships in the region when it comes to land and resources. On a technical level, the main challenge is to support regional and territorial efforts to assess the social, cultural, economic and political feasibility of the vetting processes that have already been designed, along with the legal framework that protects them. On the other hand, efforts must be unified to develop strategies to facilitate reaching consensus and handling inter-community and inter-ethnic conflicts and tensions.

Territorial governments should be strengthened, revitalizing cordial and creative trends in the practices and visions of indigenous and afro-descendant peoples. A crucial aspect of the programs undertaken has been to provide institutional support. However, designing proposals to strengthen these peoples' forms of government is always a challenge. The challenge is to overcome antagonistic dichotomies: tradition and development, community and society, ethnic background and the construction of a multicultural citizenry, in order to support local processes with diverse perspectives on human development.

⁹The Awaltara Luhpia Nani territory in the RAAS and the 3 territories in the Special Zone.

There is a need to support the formulation of national and regional public policies that strengthen and support territorial self management. One of the greatest fears of some community members is that, despite having legalized titles, they have very little possibility to exercise the possession and use of their rights in order to truly and effectively manage the land and its resources. These community members have pointed out the need for state policies to support co-management programs, transparency in the transfer of income and the implementation of the vetting process; as well as to financially support the territories and their communities in order to engage in sustainable development programs, etc. In this context, skills and local knowledge should be strengthened in order to negotiate areas of work for each authority and to manage the tensions inherent in the relationships between community, territory, municipality region and state.

To support the communities in defining sustainable development strategies: In territories located within government-defined protected areas, the environmental legal framework limits the development of income-generating economic activities¹⁰. In territories outside of the protected areas, it has been noted that there are few economic options leading to the sustainable management of forests and land. The challenge is to support the formulation of managerial and administrative models for land management and sustainable development proposals. Otherwise, without other sources of income and successful and sustainable management proposals, the traditional extractive and exploitative extensive farming model (both for forestry and agriculture) –inefficient, destructive and polluting– will be the big winner, by default. Thereupon, the power and inter-ethnic struggles to control the land and its resources in order to expand extensive cattle-raising or to extract the remaining mineral, forestry and fishing resources will worsen, and escalate, to the detriment of the original peoples' communities.

¹⁰ *Environmental laws limit the development of economic activities in all protected areas. However, within these areas there is a classification which allows for greater or lesser legal permissiveness. In many cases, weak control over areas classified as buffer zones explains why many inhabitants there disregard these laws. See Bonilla, Alejandro. 2010. "Feasibility of the vetting process in the indigenous territories of Bosawás and the RAAN. Matungbak Indigenous Territorial Government".*

6. Conclusion

The right to collective land has been defined by IACHR as a human right of the indigenous peoples of the continent. Similarly, ILO Convention 169, ratified by the Nicaraguan Government in 2010, and the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples emphasize the recognition and protection of the right to communal property as a fundamental right of indigenous peoples. The programs promoted by the Regional Councils of the Autonomous Regions, in conjunction with the National Commission for Demarcation and Titling (CONADETI), the Secretariat of the Caribbean Coast Development Council (SCDC), UNDP, ACCD and the Ford Foundation, have helped strengthen the territorial titling process of the indigenous and afro-descendant communities of the Caribbean Coast.

This process was initiated by the Land Administration Project (PRODEP), financed by the World Bank. It has complied with international law but, above all, has responded to one of the central demands of the original peoples. All these advances would not have been achieved without the political will of the Nicaraguan Government, which made it a priority to support the demarcation of indigenous and afro-descendant lands on the Caribbean Coast; the support and coordination of cooperation agencies, international NGOs and multilateral agencies; and the enormous efforts of the communal, territorial and regional autonomous authorities to achieve the fulfillment of a fundamental historical right.



Table 2.
Territories titled by the end of 2010 (15 in total)

Territories by region and zone	Communities	Year in which title was given	Population	Quantity of hectares	Quantity of Km ²
RAAN					
1. Kipla Sait Tasbaika Kum	14	2008	5,164	113,597	1,135.97
2. Li Lamni Tasbaika Kum	26	2008	9,103	138,227	1,382.27
3. Wangki Li Aubra	18	2009	7,991	88,434.78	884.36
4. Awas Tingni	3	2008	1,164	73,394	733.94
5. Mayangna Sauni As	16	2008	10,000	163,810	1,630.10
6. Sikilta	1	2009	870	43,241.40	432.41
7. Twahka	14	2009	2,400	54,556	545.56
8. Wangki Maya	21	2009	16,596	138,882	1,388.81
9. Wanki Twi-Tasba Raya	21	2009	18,117	162,181	1,621.82
10. Prinzu Awala	19	2009	6,482	414,955	4,149.55
RAAS					
11. Awaltara Luhpia Nani Tasbaika	16	2008	9,679	241,307	2,413.07
12. Rama and Kriol	9	2009	1,936	406,849	4,068.49
Upper Coco Special Zone (Wangky Wihta Bukawas)					
13. Miskitu Indian Tasbainka Kum	20	2008	7,500	65,230	652.30
14. Mayangna Sauni Bu	9	2008	2,500	94,838	948.38
15. Matungback	9	2009	4,743	62,883	628.83
Total	216		103,854	2,245,226.84	22,452.27

Table 3.
Territories to be titled

Territories still to be titled	Communities	State of Progress
Puerto Cabezas		
1 Ten Communities	23	Initial stage of conflict resolution.
2 Karatá	3	Undertaking own diagnostic study
3 Tawira	17	Initial stage of own diagnostic study.
4 Twi Waupasa	17	Initial stage of conflict resolution and marking the boundaries.
5 Tasba Pri	13	Initial stage of conflict resolution and marking the boundaries.
Prinzapolka		
6 Prinzu Auhya Un	12	Initial stage of conflict resolution. Diagnostic study for the Wawa Bar bloc pending. In March, 2011, asked to be titled apart.
Pearl Lagoon and Kukra Hill		
7 Twelve Indigenous and Afro-descendent Communities in the Pearl Lagoon Basin	12	Determining and marking boundaries stage. However, there are differences between Tasba Pauni and Marshall Point and other communities which are members of the bloc.
Bluefields		
8 Bluefields Kriol Territory	4	Waiting to begin diagnostic study
Total	41	

Source: Acosta, 2010.

Basic Bibliography:

Acosta, María Luisa (2006) "Awás Tigni versus Nicaragua, and the process of indigenous land demarcation on the Nicaraguan Caribbean Coast". In Wani No 47 pp: 6- 15.

Acosta, Maria Luisa (2010) "Challenges in the processes of land titling and vetting as a protection of indigenous property", In Wani, January-March. No 60, pp: 5-17.

Antonio, Margarita (2008) "Who do the Coast lands belong to and who will get them?" In Envío, No 321, <http://www.envio.org.ni/article/3904>

National Assembly of Nicaragua (1987) Law No 28: Autonomy Statute for the Regions of the Atlantic Coast of Nicaragua. In La Gaceta, No 238 October 1987

National Assembly (2003) Law 445: Law of Communal Property of the Indigenous Peoples and Ethnic Communities of the Autonomous Regions of the Atlantic Coast of Nicaragua and of the Bocay, Coco, Indian and Corn rivers. In La Gaceta, No 16 January 23, 2003.

Bonilla, Alejandro (2010) Feasibility of the vetting process in the Bosawás indigenous territories and the RAAN. Matungbak Indigenous Territorial Government

CACRC (1998) General diagnostic study on the tenure of land in the indigenous communities of the Atlantic Coast. Bluefields and Puerto Cabezas, Nicaragua Central American and Caribbean Research Council

Inter-American Court of Human Rights (2002) Report No. 75/02, Case 11.140 (December 27, 2002), from the Inter-American Court of Human Rights in the case of the Mayangna Sumo community of Awás Tingni against Nicaragua, R (August 31, 2001) IACHR (Ser C) No 79.

Finley-Brook and Offen, Karl (2009) Bounding the Commons: Land Demarcation in Northeastern Nicaragua. In: Bulletin of Latin American Research Vol. 28, No3, pp: 343-363.

Goett, Jennifer A. (2006) Diasporic Identities, Autochthonous Rights: Race, Gender and the Cultural Politics of Creole Land Rights in Nicaragua. Austin, Texas: University of Texas Library Diss.

Grünberg, Georg. (2004) "Indigenous lands and territories in Central America" In Asuntos Indígenas: Derechos Territoriales. IWGIA No 4, pp: 6-21.

Gurdián, Galio; Gordon, Edmund; and Hale, Charles (2003) Rights, Resources and the Social Memory of Struggle: Reflections on a Study of Indigenous and Black Community Land Rights on Nicaragua's Atlantic Coast. In: Human Organization. Vol. 62, No 4, pp: 369- 381.

Larson, Anne (2010) "Making the 'rules of the game': Constituting Territory and Authority in Nicaragua's Indigenous Communities." In: Land Use Policy. No 27, pp: 1143-1152.

United Nations General Assembly Resolution 61/295: "Declaration on the Rights of Indigenous Peoples" Doc. UN/61/67, Appendix (September 13, 2007).

ILO (1989) Convention of the United Nations International Labor Organization on Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries. No. 169.

UNDP (2005) The Autonomous Regions of the Caribbean Coast: Nicaragua assumes its diversity? Human Development Report Managua, Nicaragua: UNDP.

Soto, Fernanda; URACCAN-IREMADES; and NITLAPAN (2010) "Demarcation and titling in the Autonomous Regions of the Nicaraguan Caribbean Coast: Brief historic review and implementation of territorial governance in the RAAN". Teaching materials used for certification: "Tenure, Rights and Governance in Indigenous Lands". RRI and Ford Foundation.



En el trabajo de titulación y gestión territorial de pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua, la participación de la mujer ha sido indispensable y notoria.